

Sarah García Silberman. Estudió la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana, y maestría y doctorado en Psicología Social en la UNAM. Ha desarrollado diversas líneas de investigación relacionadas con la salud y la enfermedad mental, la violencia y los medios masivos de comunicación. En la actualidad es investigadora titular de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría y, desde 1996, jefa del Centro de Información en Salud Mental y Adicciones de esa misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora del Posgrado en Salud Mental Pública de la Facultad de Medicina (UNAM) y tutora de Posgrado de la Facultad de Psicología (UNAM). Conduce el proyecto *Televisión, Violencia y Salud Mental*, financiado por Conacyt. Su producción científica comprende numerosos artículos de investigación y divulgación en revistas especializadas, así como la impartición de cursos, talleres y conferencias dentro y fuera del país. Es autora de *Medios de comunicación y violencia* con L. Ramos (IMP/FCE, México, 1998), y "Medios de comunicación electrónicos y violencia", en *Responsabilidad social, autorregulación y legislación en radio y televisión* (UNAM, México, 2002).

Sarah García Silberman

LA VIOLENCIA COMO FENÓMENO MEDIÁTICO
Y DE SALUD PÚBLICA

Ninguna investigación demuestra que los medios generen violencia, pero sí que juegan un rol instrumental clave en la reproducción de los valores que propician la injusticia social y la inseguridad. Es reciente el abordaje integral del tema, que considera tanto aspectos de salud pública como socioeconómicos, y una previsión es que las medidas legales y policíacas contra la violencia deben corresponderse con políticas que reduzcan la pobreza y la inequidad. En ese contexto, los medios podrían favorecer una cultura de seguridad y confianza que sustituya a la del miedo

El siglo XXI comienza marcado por niveles crecientes de violencia, la cual se reproduce conforme las nuevas generaciones aprenden de las anteriores, así como las víctimas de sus agresores, y porque se permite que perduren las condiciones sociales que la favorecen. No hay un factor que por sí solo explique este problema polifacético, de hondas raíces biológicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas y políticas, para el que además no existe una solución sencilla, sino que debe ser abordado en varios niveles y por todos los sectores sociales.

Apenas de manera reciente este fenómeno ha sido abordado bajo la óptica de la salud pública. El primer Informe Mundial

Sarah García Sílberman

sobre la Violencia y la Salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, apunta que cada año más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierde la vida violentamente. Asimismo, cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud sobre el impacto de la violencia en la región destacan que 120,000 personas son asesinadas cada año y 180,000 mueren por suicidios o accidentes; aparte de que, por cada persona que muere en circunstancias violentas, muchas más resultan heridas y sufren secuelas físicas y mentales.

Por desgracia, las estadísticas no son lo suficientemente confiables, entre otras razones, porque suelen manejarse con criterios de conveniencia política y por la magnitud de la cifra *oscura* —un problema grave que obedece a la existencia de un importante sub-reporte derivado de la no denuncia.

La Ciudad de México ostenta el dudoso honor de ser la más poblada del mundo y ello puede explicar la magnitud de sus graves problemas sociales y ambientales, entre los que se cuentan la delincuencia y la violencia, que son también objeto de preocupación central entre la opinión pública.

La violencia es una manifestación compleja, que no está conformada nada más por los hechos concretos que la expresan. Como uso excesivo de la fuerza, es un objeto que se evalúa e interpreta en un marco social determinado, lo cual a su vez tiene relación con sus orígenes y persistencia. De este modo, los valores subyacentes a la violencia son la dominación, el uso de cualquier medio para alcanzar los fines propios y la deshumanización, todo lo cual contribuye a la espiral maligna que reproduce dicha violencia.

Existe la hipótesis de que el grado en el que se legitima la violencia “oculta” en una sociedad afecta la incidencia de la violencia no legitimada —o delito violento—. Quienes poseen y ejercen el poder justifican la violencia por el principio del orden, esto es, por la necesidad de preservarlo. Así, tal orden puede ser legal, pero no necesariamente legítimo, de modo que

la estructura social y la de las instituciones contribuyen a crear un clima en el que se alienta o inhibe la violencia, dependiendo de las normas sociales y culturales prevalecientes.

La seguridad/inseguridad pública se relaciona con diversos aspectos psicológicos y sociales de extrema complejidad, que involucran factores tanto individuales como micro y macrosociales (sociodemográficos, de personalidad, experiencias personales y percepción del ambiente, por ejemplo). Su abordaje y comprensión precisa un análisis amplio, profundo e integral de tales factores, enmarcándolos en una firme conceptualización teórica.

Si bien la criminología es la disciplina que la estudia en primera instancia, deben considerarse de manera integral las contribuciones de la psicología, la antropología, la sociología y la filosofía, entre otras disciplinas.

El fenómeno de la inseguridad pública genera reacciones y efectos psicosociales relevantes, los cuales están siendo ampliamente investigados a partir de la gran preocupación que han despertado el incremento de la delincuencia y la percepción de creciente violencia. Los estudios muestran que elevados porcentajes de delitos ocurren con violencia y que son éstos los que mayor impacto producen tanto en la conducta y el estilo de vida, como en los estados de ánimo individual y colectivo.

En el ámbito de lo emocional están la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el miedo; el temor a la victimización es una reacción generada ante la posibilidad —real o percibida— de ser víctima de un delito. En el ámbito del comportamiento se hallan la desconfianza, la evitación, el aislamiento, la desesperanza y la frustración. Y en el del estilo de vida, el desarrollo de estrategias de autoprotección y de conductas evasivas; para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. El aumento de la delincuencia y la inseguridad conllevan, en ese contexto,

Sarah García Sílberman

al auge de un complejo sistema comercial/industrial, conformado por personas y empresas especializadas en negociar, asesorar, atender y cuidar.

Analizar la inseguridad fuera del contexto más amplio en el que se presenta resulta ocioso. La circunstancia que vivimos no puede verse aislada de fenómenos como la pobreza, la creciente inequidad, el desempleo y la falta de expectativas. Diversos estudios exhiben una estrecha relación entre el repunte de la violencia y el de la concentración de la riqueza —correspondiente a la creciente desigualdad, agudizada en México durante la última década—. La pobreza y, más allá de ésta, la inequitativa distribución de la riqueza son factores estrechamente relacionados con la violencia. Es necesario observar la relación que guarda la violencia con la pobreza y la desigualdad, sin olvidar los efectos de la situación política imperante en una sociedad específica.

Los innegables esfuerzos y logros en la construcción de la democracia en América Latina han sido insuficientes en la medida en la que los cambios políticos respectivos se producen a la par de una persistente y creciente exclusión de grandes sectores sociales de los beneficios del desarrollo (educación, salud, tierra y otros activos productivos, como el crédito o el empleo, el poder político o el acceso a los medios de comunicación). Aunque discutible —y discutido—, es notorio el aumento de la inequidad en las últimas décadas (mayor desigualdad en la distribución del ingreso, deterioro de la estructura del empleo, reducción del gasto público social y en la prestación de servicios básicos, deterioro del ingreso *per cápita* y merma del salario mínimo).

Datos recientes del Banco Mundial indican que más de la mitad de los 400 millones de latinoamericanos no puede satisfacer sus necesidades básicas y más de 100 millones viven en la indigencia, siendo la nuestra la región más desigual del mundo en ingreso y acceso a servicios básicos de educación y salud. El Banco Interamericano de Desarrollo reporta que en

La violencia como fenómeno mediático y de salud pública

esta parte del mundo 226 millones viven con menos de 2 dólares diarios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que, en los últimos seis años, 23 millones de latinoamericanos dejaron la clase media para ingresar a la pobreza. El 10% de los individuos más ricos percibe entre el 40% y el 47% del ingreso total en la mayoría de nuestras naciones, en tanto que el 10% más pobre apenas accede al 1.6%.

En México, la Secretaría de Desarrollo Social reconoce que la mitad de la población es pobre y que estamos entre los países con mayor desigualdad del mundo. Entretanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habla de la relación entre desempleo y delincuencia, y sostiene que existe una poderosa correlación entre el desarrollo de la tasa de desempleo abierto nacional y el aumento en los índices delictivos.

Partiendo, pues, de que la inequidad social es una de las principales causas del aumento de la violencia, es evidente la urgencia de satisfacer las demandas básicas de la población a fin de evitar mayor inestabilidad e inseguridad.

El problema es que dado que la violencia estructural no se asume como tal, a menudo las manifestaciones de violencia individual tratan de enfrentarse aumentando la violencia represiva institucional, por lo que el ciclo sigue indefinidamente. La solución está en romperlo, sobre todo afectando las condiciones estructurales que lo generan.

Sin perder de vista todo este contexto, ¿juegan los medios de comunicación un papel relevante en la construcción de un escenario social seguro o inseguro?

Las imágenes y descripciones de actos violentos invaden los medios. Durante décadas, los científicos sociales, fascinados por el aparente poder e influencia de aquellos, han desarrollado y publicado miles de trabajos acerca de sus efectos, entre los que el más abordado es el producido por la relación entre dicho manejo mediático y la violencia.

Sarah García Sílberman



El interminable debate no ha aportado —ni, por lo visto, aportará— respuestas concluyentes. ¿Los medios sólo reflejan la violencia prevaleciente o la propician? ¿La incrementan o pueden colaborar a frenarla? Estas preguntas encontrarían un “sí” y un “no” como respuesta, dependiendo de los propósitos y el consecuente uso que se haga de los medios. Éstos son lo que su denominación indica, pero están al servicio de grupos, sistemas y estructuras de poder concretas que determinan su desempeño. Los medios son instrumentales y en tal carácter fomentan el consumo, distraen, entretienen, generan miedo y manipulan.

Desde la perspectiva de la investigación crítica, el estudio de la violencia y su relación con los medios de comunicación ha dirigido sus propuestas hacia tres líneas fundamentales:

- 1) la violencia como problema estructural de sociedades injustas, desiguales y dominadas;
- 2) los mensajes de los medios como reproductores de la injusticia, desigualdad y dominación;
- 3) los medios de comunicación como aparatos ideológicos que fomentan la violencia.

Los medios son considerados instituciones que propician la violencia al reducir la comunicación entre las personas y con ello alimentar eficaces controles ideológicos. Fomentan la soledad y el aislamiento, con lo que impiden las relaciones interpersonales y propician el consumismo; la exaltación del *tener* por encima del *ser*; la competencia y el triunfo de unos a costa de otros; la pasividad y el desinterés en los asuntos colectivos; y la incomprensión de la realidad —al forzar una lectura condicionada del mensaje y una actuación manipulada frente a los acontecimientos.

La crisis económica que padecemos los mexicanos en los últimos años ha agravado la desigualdad en la distribución del



La violencia como fenómeno mediático y de salud pública

ingreso y el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría. En cambio, el aparato productivo y los medios, en especial la televisión, han conservado el patrón de comportamiento previo a la crisis: generan bienes accesibles sólo para una minoría e inducen su compra y consumo a través de copiosos mensajes publicitarios. En consecuencia, la producción de satisfactores y la publicidad se orientan a modelos de consumo y estilos de vida ajenos a las condiciones y posibilidades reales de la mayoría.

El manejo de la violencia a través de los medios puede estructurarse según sus diversas intencionalidades, que hay que saber distinguir, pues cada una conlleva efectos potenciales no sólo diversos, sino incluso opuestos. En un extremo se encuentra la violencia espectacular y gratuita, que sólo pretende estimular y exacerbar las emociones; en el otro, la cuestionadora, que busca conducir a una toma de conciencia crítica frente a la realidad.

Es por ello que la prevención de la violencia tendrá más probabilidades de éxito si es integral y tiene base científica. La fragmentación de este campo de estudio en distintas áreas de competencia e interés, y la ausencia de colaboración entre los diversos grupos sociales impiden observar con claridad el fenómeno y propician que su prevención se aborde de manera poco sistemática.

Se requiere orientar los programas y políticas de prevención de la violencia hacia los individuos, las relaciones, las comunidades y las sociedades en su conjunto, y aplicarlos con la colaboración de distintos sectores de la sociedad, en escuelas, centros de trabajo y sistemas de justicia penal. Por lo general, las intervenciones emprendidas en las personas desde su infancia y las de largo plazo suelen ser más eficaces.

La violencia es prevenible mediante decisiones políticas, el reforzamiento de sistemas de vigilancia y el diseño de campañas que se enfoquen en los problemas específicos de cada país. Es posible evitar aún aquella que se filtra en los discursos autoritarios, que justifican que una violencia se extermine con otra mayor; es decir, la que en sí constituye el orden social

Sarah García Sílberman

vigente. La violencia no es un componente intrínseco de la condición humana y se previene con gran cantidad de instrumentos dirigidos a los individuos, las familias y las comunidades.

Por ejemplo, como complemento de las acciones legales y los aparatos de seguridad, se propone un acercamiento desde la perspectiva de la salud pública, que incluya los complejos fundamentos sociales, psicológicos, económicos y comunitarios de la violencia, dotando a los responsables políticos de variadas alternativas concretas para prevenirla.

El papel de los medios de comunicación puede ser fundamental en la transición de una cultura de violencia y miedo, hacia una de seguridad y confianza. El gobierno, la sociedad y los individuos podemos revertir la situación. Si bien la seguridad pública ha sido tradicionalmente incumbencia del sistema jurídico penal, podemos y debemos generar iniciativas de prevención en las que participen todos los sectores sociales, atacando las raíces.

Una propuesta de arranque parte de un cambio de paradigmas: de una cultura del miedo a una de la confianza, y del sistema punitivo a uno que propugne la reparación del daño, donde además se haga la clara diferenciación entre justicia, castigo y venganza. El reto paralelo es alentar cambios estructurales que favorezcan el crecimiento económico, la reducción de las inequidades, la disminución de la pobreza y la generación de oportunidades de desarrollo individual y colectivo, hoy casi inexistentes.

Por sí mismos, los medios no pueden construir un escenario social seguro o inseguro, pero sí ser catalizadores en una u otra dirección. De ahí la trascendencia de establecer espacios de reflexión y mecanismos de colaboración entre sujetos e instituciones con intereses coincidentes, para la planeación e implementación de acciones y proyectos tendientes al fomento, desde sus respectivos ámbitos de acción, de una sociedad mejor informada y más participativa en la construcción de un entorno más seguro.

二

二

二

二